

KENNETH ROTH

# Luces y sombras en la defensa de los derechos humanos en 2005 (II)

Traducción de Berna Wang

*Organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea o la Unión Africana son claves en el trabajo de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de algunos avances y nuevas iniciativas, han sido muchos los intereses estatales que han ensombrecido el trabajo de estas organizaciones. La trayectoria de países influyentes como Rusia y China también son objeto de análisis en este texto que constituye la segunda parte del publicado en el anterior número de "Papeles de Cuestiones Internacionales", y que forma parte del prestigioso informe anual 2006 de Human Rights Watch.*

## La Unión Europea

Washington no fue la única causa del vacío de liderazgo mundial en materia de derechos humanos. La Unión Europea podría haber llenado ese vacío, pero en su lugar siguió actuando por debajo de sus posibilidades, en parte debido a la desorganización institucional y en parte debido a que tenía otras prioridades. La necesidad de llegar a un consenso entre los 25 miembros era parte del problema. La propuesta de la nueva Constitución habría racionalizado las decisiones sobre política exterior, aliviando la necesidad de unanimidad entre sus miembros y reforzando al representante principal de la política exterior de la UE. Sin embargo, la Constitución sufrió un importante revés cuando los votantes la rechazaron en los referendos de Francia, en mayo, y en los Países Bajos en junio.

La continua necesidad de unanimidad, combinada con un proceso de toma de decisiones opaco y la ausencia de liderazgo entre los miembros de la UE, generó una dinámica que favoreció las respuestas débiles hacia las violaciones de derechos humanos en terceros países. No obstante, respecto de los países que desean adherirse a la UE, la transparencia del proceso, unida a la facultad de cualquiera de los miembros de bloquear el avance de

Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch

un Estado aspirante, tendió a subir el listón en materia de derechos humanos. Por tanto, se ejerció una presión positiva para la mejora, sobre todo en Turquía.

Sin embargo, en lo que se refiere a protestas o intervenciones externas, los procedimientos para la toma de decisiones de la UE tendieron a actuar en sentido contrario. Cuando los gobiernos de la UE ya habían acordado ejercer una presión común, como en el embargo de armas impuesto a China tras la matanza de la plaza de Tiananmen de 1989, sus normas sobre el consenso favorecieron la perpetuación del *statu quo*, incluso a pesar de que Francia y Alemania, entre otros, querían poner fin al embargo. No obstante, lo más habitual en el caso de iniciativas nuevas, fue que los procedimientos de la UE favorecieran las respuestas débiles. La UE logró alcanzar el consenso y desempeñar un papel positivo patrocinando resoluciones críticas en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la República Democrática del Congo, Corea del Norte, Sudán, Uzbekistán y Turkmenistán. Pero, en general, la UE no hizo efectivas sus protestas en materia de derechos humanos utilizando sus numerosos acuerdos de comercio y cooperación para presionar a favor de mejoras en la situación de estos derechos en países que se beneficiaban de la ayuda masiva de la UE y de privilegios comerciales con la Unión. Por ejemplo, la UE siguió considerando su relación con Oriente Medio y el Norte de África sobre todo en términos de asistencia comercial y económica. La mayoría de los gobiernos del Área de Cooperación Europea-Mediterránea han concluido acuerdos con la UE que exigen el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. No obstante, rara vez, y nunca públicamente, la UE ha hecho cumplir estas condiciones relativas a los derechos humanos, por ejemplo, detallando pasos concretos y específicos que debería dar un gobierno para situar a su país en una trayectoria positiva; mucho menos ha esbozado un marco temporal para las reformas exigidas y concretado las consecuencias de su incumplimiento.

Un buen ejemplo fue el Acuerdo de Asociación Egipto-UE, que entró en vigor en junio del 2004. La UE no ha invocado aún la cláusula que precede a todo el acuerdo sobre “el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos”. Lo mismo cabría decir de los acuerdos adoptados por la UE con Túnez en 1999 y con Israel en 2000. Los gobiernos de la UE son los mayores donantes de la región del Norte de África, lo que les da una gran influencia potencial, pero apenas la utilizaron en 2005: les era más cómodo afirmar que el comercio y la diplomacia silenciosa sobre los derechos humanos produciría regímenes más liberales, aunque eso abandonase al movimiento de la sociedad civil de la región que lucha por la reforma sin el respaldo abierto de la poderosa UE.

Respecto de África, la Unión Europea no dudó en actuar contra un Estado paria como el del presidente Robert Mugabe en Zimbabue. En este caso adoptó una serie de medidas de castigo, incluidos un embargo de armas, la congelación de activos, una prohibición de visados y la suspensión de toda la ayuda no humanitaria. Los gobiernos europeos clave tam-

bién aportaron tropas para el mantenimiento de la paz en Costa de Marfil y apoyo logístico a las tropas de la Unión Africana en Darfur. Pero la UE no actuó con similar contundencia en lo que se refiere a los abusos cometidos por gobiernos con los que mantenía relaciones más estrechas. En Angola, Etiopía, Ruanda y Uganda, por ejemplo, la UE condenó los abusos, pero no advirtió a los gobiernos de que estaban incumpliendo gravemente sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas las contenidas en el acuerdo que regula la asistencia europea a estos países. En este sentido, la UE pareció favorecer cada vez más el *statu quo* en África.

---

### El activismo europeo reducido en África fue paralelo a la creciente intervención de China en el continente, en términos que no prestaban importancia alguna a los derechos humanos

---

Individualmente, los gobiernos europeos no fueron mejores en sus políticas hacia África. El primer ministro británico Tony Blair invitó al primer ministro etíope Meles Zanawi como uno de los dos únicos jefes de Estado o de gobierno africanos incluidos en la Comisión para África creada por Blair, pero Gran Bretaña guardó silencio sobre la represión que ejercía Meles sobre su oposición política. De modo similar, Bélgica siguió prestando un fuerte apoyo al presidente ruandés Paul Kagame, a pesar de la represión que ejerce su gobierno en el país y de su responsabilidad respecto de las atrocidades cometidas en la vecina República Democrática del Congo. Mientras tanto, aunque el gobierno francés mantuvo la presencia de sus tropas en Costa de Marfil, su política de “retirada táctica” de gran parte del resto del continente africano ofreció posibles peligros para la protección de los derechos humanos. En un continente donde la mejor protección de estos derechos depende a menudo de un mayor compromiso externo, la reducción de la voluntad francesa de intervenir hizo aparecer el espectro de nuevas dificultades en los países africanos francófonos como la República Democrática del Congo, Guinea y Costa de Marfil. Este activismo europeo reducido en África fue paralelo a la creciente intervención de China en el continente, en términos que no prestaban importancia alguna a los derechos humanos. Una excepción positiva a la indiferencia de la UE hacia el cumplimiento por otros gobiernos de sus compromisos contraídos con ella, en materia de derechos humanos, fue el caso de Uzbekistán. Costó más de cuatro meses, pero en octubre, la UE decidió por fin suspender parcialmente su acuerdo de asociación y cooperación con este país debido a la negativa del presidente Karimov a permitir una investigación internacional sobre la matanza de Andiyán. Esta fue la primera vez que la UE suspendía un acuerdo de este tipo por motivos de derechos humanos; un precedente importante sobre el que construir pero también un triste comentario sobre la falta de seriedad con la que la UE suele tratar los requisitos de derechos humanos, legalmente vinculantes, contenidos en todos estos acuerdos.

La UE tomó la iniciativa en el exitoso esfuerzo de condenar a Uzbekistán ante la Asamblea General de la ONU. Además, la Unión impuso un embargo de armas a Uzbekistán y la prohibición de visado a una decena de altos cargos que se creía habían desempeñado un papel en la matanza, aunque, incomprensiblemente, no al propio presidente Karimov. Alemania permitió que el ministro del Interior uzbeko, el coronel general Zakirjan Almatov, una de las personas que se cree ordenaron la matanza de Andiyán, entrara en Alemania para recibir tratamiento médico, a pesar de la prohibición de los viajes. Dado que el motivo de la prohibición de los viajes era precisamente negar a estas personas el privilegio de este tipo de visitas, la conducta alemana cuestionó si las sanciones eran realmente parte de una estrategia coherente para lograr el cambio en Uzbekistán.

Aparte de sus relaciones comerciales y de ayuda, en los últimos años la UE ha comenzado a desempeñar un papel positivo en la organización de operaciones sobre el terreno en zonas de conflicto. A tenor de los cómputos actuales, hay al menos nueve misiones activas de la Política de Seguridad y Defensa Europea.<sup>1</sup> La UE contribuyó a obtener un acuerdo de paz para poner fin al feroz conflicto de Aceh<sup>2</sup> y proporcionó observadores para vigilar su cumplimiento, incluido el respeto a los derechos humanos. También envió policías para vigilar el cruce fronterizo de Rafah tras la retirada israelí de la franja de Gaza y facilitó asistencia al Estado de derecho en lugares como Georgia y la República Democrática del Congo.

Dadas las dificultades de la UE para hablar con una sola voz, los Estados miembros podrían haber tratado la postura común de la UE sobre asuntos exteriores de derechos humanos como una base y no como techo, es decir, como lo mínimo que harían por los derechos humanos, y no como el máximo. Eso podría haber sido el caso con países tan importantes como Rusia, China, EEUU y Arabia Saudí, con todos los cuales los miembros de la UE tienen políticas exteriores individuales activas además de su postura común. Sin embargo, en su mayor parte, la ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos hacia estos países que había frustrado una acción común efectiva también se hizo visible en los acuerdos bilaterales.

La postura de la UE hacia Rusia en 2005 hizo que, en comparación, pareciera enérgica la defensa de los derechos humanos por parte de EEUU. Los negocios, la energía y otros intereses políticos dominaron las preocupaciones de la UE, instigadas por una indecorosa competición entre el primer ministro británico Blair, el presidente francés Chirac y el ex canciller alemán Schroeder para proclamar la cercanía de su relación con el presidente ruso

---

<sup>1</sup> En el momento de publicación de este artículo, son once las misiones de la Política de Seguridad y Defensa Europea de la UE (N. de la Ed.).

<sup>2</sup> Sobre el conflicto en Aceh ver Jordi Urgell, "¿Paz en Aceh?: retos locales, oportunidades globales", en *Papeles de Cuestiones Internacionales*, primavera 2006, nº 93, pp. 157-173 (N. de la Ed.).

Putin. Alemania, por ejemplo, estaba preocupada por negociar la construcción de un gasoducto desde Rusia, que se acordó en septiembre, y quería el apoyo de Rusia para su intento de obtener un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Schroeder, que al parecer se entrevistó con Putin treinta y siete veces durante los años que fue canciller, siguió haciendo pocas referencias en público a la conducta de Rusia en materia de derechos humanos. Francia quería mantener unas relaciones cálidas para facilitar la cooperación en el Consejo de Seguridad, especialmente en relación con Oriente Medio.

En una cumbre UE-Rusia celebrada en octubre de la que fue anfitriona Gran Bretaña, que ocupaba la presidencia de la UE, los líderes reunidos, según la versión de la UE, se limitaron a “abordar con espíritu constructivo las novedades internas de la UE y Rusia, incluida la situación en Chechenia y las próximas elecciones que van a celebrarse ahí”, y “acogieron con beneplácito” la decisión de la UE de proporcionar asistencia económica al norte del Cáucaso como “otra señal más de la voluntad de la UE de cooperar en la región”. No hubo ninguna alusión en esta declaración embarazosamente positiva de que el problema central de Chechenia era la negativa de Rusia a poner fin a las atrocidades que cometen sus fuerzas. Siguiendo líneas similares, la UE no patrocinó una resolución que criticara la actuación rusa en materia de derechos humanos en Chechenia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Respecto de China, dominaron de nuevo los negocios y otros intereses políticos. Francia y Alemania presionaron para que se levantara el embargo de armas que se había impuesto a China como protesta por la matanza de la plaza de Tiananmen, pese a que no se habían hecho avances en la rendición de cuentas de los funcionarios que ordenaron la matanza y el Gobierno chino se había negado a facilitar información sobre el número de fallecidos, heridos y detenidos. El embargo siguió debido a las enérgicas objeciones de seguridad de EEUU, respaldadas por Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Polonia y Suecia, entre otros. Gran Bretaña apoyó inicialmente la postura de EEUU, cambió de opinión bajo la presión de Francia y Alemania y luego la volvió a cambiar, después de que las amenazas chinas contra Taiwán hicieron indefendible el levantamiento del embargo. En noviembre, Alemania, con su nueva canciller, Angela Merkel, se declaró en favor de continuar con el embargo, dejando pocas posibilidades para que se levantase en un futuro próximo. Mientras tanto, la UE siguió negándose a patrocinar una resolución sobre China en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En cuanto a Arabia Saudí, el canciller alemán Schroeder visitó el país sin hacer ninguna mención en público de las reformas políticas. El primer ministro británico Blair realizó su visita en secreto. El Gobierno británico presionó con fuerza para que Arabia Saudí comprase armas a fabricantes británicos al mismo tiempo que guardaba un silencio casi absoluto sobre el abismal historial del reino en materia de derechos humanos. Francia recibió al prin-

cipe heredero Abdullah, ocasión que el presidente Chirac aprovechó para hablar en términos elogiosos de las “reformas”, denominándolas “un ambicioso programa de transformación”. También alabó las ya citadas elecciones municipales, con su ámbito limitado y la ausencia de candidatas y votantes femeninas, así como las “recientes novedades en el Consejo Consultivo”, que se habían limitado a una ampliación de 120 a 150 miembros, todos ellos designados, sin la presencia de ninguna mujer y sólo un pequeño aumento de la representación de las minorías (de dos a cuatro escaños).

---

**La estrategia de la UE por reparar con EEUU  
los daños provocados por los desacuerdos por la invasión de Irak,  
parece hacer caso omiso de las violaciones de derechos humanos  
cometidas por el Gobierno estadounidense**

---

En lo que se refiere a las relaciones transatlánticas con EEUU, la UE estaba comprensiblemente ansiosa por reparar los daños provocados por los desacuerdos desencadenados por la invasión de Irak, pero su estrategia parecía incluir hacer, en gran medida, caso omiso de las violaciones de derechos humanos cometidas por EEUU. Durante la mayor parte del año, la UE, como colectivo, no expresó en absoluto su preocupación por la práctica estadounidense de hacer “desaparecer” a presuntos terroristas. Las únicas excepciones fueron las investigaciones nacionales abiertas en Italia, Alemania y Suecia sobre el papel de la CIA en la captura o atracción de sospechosos en sus territorios para su posterior envío a Egipto o Afganistán. La UE sólo se mostró más firme tras la indignación pública generalizada que desencadenaron las pruebas que se hicieron públicas en noviembre y que sugerían que EEUU estaba manteniendo centros secretos de detención cerca de aeropuertos en Polonia y Rumanía. Sólo entonces varios parlamentos y fiscales nacionales iniciaron investigaciones, la Comisión Europea abrió una investigación informal y los ministros de Asuntos Exteriores de la UE pidieron aclaraciones al Gobierno estadounidense sobre las actividades de la CIA en territorio de la UE. El Consejo de Europa inició una investigación formal y su Secretario General envió una excepcional petición formal de información sobre el asunto a los cuarenta y cinco Estados miembros.

Tras obtener la custodia de sus ciudadanos detenidos en Guantánamo, Gran Bretaña fue tan lejos que llegó hasta el punto de convertirse en un defensor de EEUU. El informe de derechos humanos de 2005 de Gran Bretaña hablaba de “cinco investigaciones [estadounidenses] importantes” sobre abusos contra presos que “concluyeron que los incidentes de abusos fueron resultado de la conducta de algunos sádicos y de un defecto de vigilancia de los mandos, y no el resultado de la política o de los procedimientos estadounidenses.” En

realidad, como ya se ha señalado, la política estadounidense es someter a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando no a la tortura. Mientras tanto, ninguna de la docena de autoinvestigaciones sobre abusos cometidos en el pasado iniciadas por la Administración Bush fue independiente, no digamos exhaustiva: sólo una examinó el papel de los altos cargos del Pentágono, y fue dirigida por miembros del propio Comité Asesor de la Junta Política de Defensa del secretario de Defensa Rumsfeld; sólo una estudió el papel de la CIA y fue dirigida por el propio inspector general de la agencia; y ninguna analizó el papel desempeñado por los altos cargos de la Casa Blanca. La Administración Bush se opuso a crear un grupo independiente con miembros de los dos partidos para estudiar los abusos cometidos en los interrogatorios, similar a la Comisión del 11-S, y se negó a nombrar un fiscal especial, pese a que el fiscal general Alberto Gonzales, arquitecto central de la política de interrogatorios de la Administración, incurría en un evidente conflicto de intereses.

La UE amenazó con desobedecer abiertamente las normas de derechos humanos en su propio trato a los refugiados e inmigrantes. El derecho internacional en materia de refugiados exige que los gobiernos concedan a cualquier solicitante de asilo una determinación justa de su petición y lo proteja de la devolución a un lugar donde sufra persecución o tortura. Pero en un esfuerzo para disuadir a los solicitantes de asilo de pedir refugio en Europa, la UE persiguió políticas que trasladarían a los países vecinos –como Libia y Ucrania– la responsabilidad de tramitar las peticiones de asilo, acoger a los refugiados y gestionar la inmigración. Ello pese a que estos países han demostrado su falta de capacidad incluso para proteger los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo e inmigrantes en sus territorios, no digamos para proporcionar una determinación imparcial de las peticiones de asilo. Libia, por ejemplo, ni siquiera tiene leyes con las que su poder judicial pueda evaluar las peticiones de asilo.

## El nefando papel de Rusia y China

Del mismo modo que la naturaleza aborrece el vacío, los gobiernos llenan los vacíos de liderazgo. En este caso, Rusia y China están sumamente deseosos por afirmarse ante la ausencia de un liderazgo firme de Occidente en materia de derechos humanos, pero sus intervenciones han sido todo menos útiles. Uzbekistán ilustra el problema. Menos de dos semanas después de la matanza, por el gobierno de este país, de un gran número de manifestantes en Andiyán, en mayo, China dio la bienvenida, incluidas las 21 salvas de saludo, al presidente uzbeko Karimov en Pekín para una visita de Estado. En noviembre, precisamente cuando Uzbekistán finalizaba un juicio para demostrar supuestamente que sus tropas nunca habían cometido una matanza en Andiyán, Rusia invitó a Karimov a Moscú para poner las iniciales a un pacto de defensa mutua. En julio, el Secretario General de la

Organización de Cooperación de Shanghai, que incluye a China, Rusia y varios países del Asia Central, culpó de la matanza de Andiyán a “terroristas” y no a las propias fuerzas de seguridad de Uzbekistán, mientras los presidentes Putin y Hu anunciaban paquetes económicos de miles de millones de dólares para Uzbekistán.

Rusia está actuando de forma similar en toda la antigua Unión Soviética. Temerosa de las corrientes democráticas que desembocaron en el derrocamiento de los gobiernos antes aliados de Georgia, Ucrania y Kirguistán, Rusia prestó su apoyo a autores de abusos como los presidentes Alexander Lukashenko, de Bielorrusia e Ilham Aliev, de Azerbaiyán. Sostuvo que las fraudulentas elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 2004 en Ucrania habían sido libres y justas, y Putin llamó al entonces primer ministro Viktor Yanukovich para felicitarle por su “victoria” poco después de finalizada la votación. Tras las elecciones parlamentarias de noviembre de 2005 en Azerbaiyán, que según parece ganó el partido de Aliev, el presidente Putin las calificó de “éxito” a pesar de que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) declaró que no habían cumplido los requisitos internacionales para considerarse como elecciones democráticas.

Rusia también ha intentado reducir la influencia positiva de la OSCE, que está desempeñando un papel central al presionar a favor de unas elecciones libres y justas en toda la antigua Unión Soviética y de que se haga mayor énfasis en las cuestiones de seguridad. Ha insinuado que operaciones de la “dimensión humana” de la OSCE como la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales deberían ser abordadas por “consenso” de los Estados miembros, lo que facultaría que Moscú vetase cualquier iniciativa que no le gustara. Rusia también amenazó en octubre con recurrir a una maniobra de procedimiento que habría detenido el rápido avance hacia un Consejo de Derechos Humanos de la ONU creíble que sustituyera a la desacreditada Comisión de Derechos Humanos.

En cuanto a China, su crecimiento económico y su búsqueda de recursos naturales, combinados con su política declarada de “no injerencia en asuntos internos”, hicieron que reforzase a regímenes corruptos y represivos de África, América Latina y Asia, en perjuicio de los habitantes de estas regiones. Deseoso de hacer negocios con cualquiera, el Gobierno chino lanzó una cuerda de salvamento económico a gobiernos, como los de Sudán y Zimbabwe, autores de graves abusos. Al comprar petróleo y conceder préstamos masivos respaldados por el petróleo, Pekín también cerró los ojos a la corrupción de gobiernos irresponsables como el de Angola. Esta masiva inyección de dinero en efectivo ayudó a Angola a resistirse a las medidas anticorrupción que intentó imponer el Fondo Monetario Internacional. China proporcionó apoyo económico y militar al Gobierno sudanés pese a que estaba realizando una limpieza étnica masiva en Darfur, al mismo tiempo que Pekín lograba suavizar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que amenazaban con



imponer sanciones contra Jartum por sus atrocidades en Darfur. Las personas más desfavorecidas de África sufrieron aún más porque Pekín, en sus tratos con sus gobiernos, mostró esta indiferencia hacia su situación.

China es, de forma creciente, también un país donante, pero sin ejercer la presión concomitante para que se respeten los derechos humanos que, al menos teóricamente, acompaña la ayuda occidental. Como dijo el presidente Hu: “proporcionar ayuda a los países africanos sin condiciones políticas [...] es una parte importante de la política de China hacia África.” La opinión de China de que las condiciones en materia de derechos humanos constituyen una injerencia política injustificada reduce significativamente las oportunidades para que esta ayuda beneficie a las personas que más la necesitan.

## Darfur y la Unión Africana

No cabe duda de que la continuación del despliegue de tropas de la Unión Africana (UA) en Darfur en 2005 salvó vidas. Sin embargo, la decisión tardía de la UA –una organización nueva y deficientemente equipada– de permitir a los países occidentales que proporcionaran apoyo logístico y de otro tipo hizo que se perdieran muchas vidas que se podrían haber salvado. El contingente de siete mil tropas y policías civiles de la UA que finalmente se desplegaron en octubre en Darfur no fue lo bastante grande como para crear las condiciones de seguridad necesarias para que alrededor de dos millones de desplazados regresaran a sus hogares sin peligro.

Gran parte de la violencia que continuó afectando Darfur se debió al Gobierno sudanés, sobre todo a su negativa a desarmar y desmovilizar a su milicia por poderes, los *yanyawid*, y poner fin a la impunidad con la que actúa en Darfur. El Gobierno de Sudán también puso numerosos obstáculos en el camino de la fuerza de la UA, como negarse durante meses a permitir que la UA importase vehículos blindados de transporte de personal para la protección de sus tropas y de la población civil. Sin embargo, la propia UA tiene parte de culpa, pues su interpretación de su mandato fue anémica: mostró demasiada poca voluntad para moverse agresivamente cuando fue necesario a fin de proteger a las personas. Además, al insistir en manejar Darfur –deseo que la comunidad internacional, preocupada por otras partes del mundo, estaba muy dispuesta a conceder– la UA alivió a gobiernos más poderosos de cualquier presión inmediata para desplegar sus propias tropas.

China dió apoyo económico y militar al Gobierno sudanés pese a la limpieza étnica en Darfur

Los Gobiernos de EEUU, Canadá y Europa desempeñaron papeles de apoyo en Darfur. Los funcionarios hablaron en reiteradas ocasiones de los continuos homicidios y violaciones que se estaban cometiendo, y enviaron emisarios periódicamente a Jartum y Darfur, pero la preocupación por Irak y Afganistán hizo que la aportación de tropas de EEUU, la UE o la OTAN no tuviera ninguna posibilidad política. Como resultado, los gobiernos occidentales y la comunidad internacional en su conjunto dejaron Darfur en las manos de las tropas de la UA y no aprovecharon la oportunidad para implementar forzosamente la “responsabilidad internacional de proteger” a los civiles en peligro grave recientemente respaldada. A finales de año, seguía sin haber perspectivas de que los residentes desplazados forzosos de Darfur pudieran regresar a sus hogares sin peligro y de que se pusiera fin a la “limpieza étnica”.

Si la UA no puede alinear con rapidez la fuerza sustancialmente mayor que hace falta para hacer cumplir un mandato de protección completo y permitir el retorno sin riesgo de los desplazados, la comunidad internacional tiene la obligación de enviar tropas para reforzar la presencia militar y civil de la UA, si es necesario bajo la bandera de la ONU. Mientras tanto, la comunidad internacional debe ejercer una intensa presión sobre el Gobierno sudanés para que permita el despliegue de una fuerza mayor, si es necesario con tropas no africanas, y deje de obstruir la labor de protección de las fuerzas desplegadas. En una señal inquietante, la propia Unión Africana rebajó esa presión en noviembre al ayudar a bloquear una votación en la Asamblea General de la ONU que habría condenado a Sudán por su responsabilidad sobre las atrocidades de Darfur.

Cuando se redactan estas líneas, la Unión Africana afrontaba un importante desafío adicional respecto de Darfur: su próxima cumbre, que iba a celebrarse en enero de 2006 en Jartum, y donde Sudán intentará obtener la presidencia de la UA. Si el presidente sudanés El Bashir llegase a liderar la UA, la misión de ésta en Darfur afrontaría contradicciones insostenibles, y los civiles de Darfur correrían el mayor riesgo mayor desde que la UA se desplegó en la región. Permitir que un gobierno asesino como el de Sudán lidere la UA convertiría en una farsa los compromisos declarados de la UA con los derechos humanos y menoscabaría la credibilidad que necesita para trabajar efectivamente en todo el continente.<sup>3</sup>

Con la creación de la Unión Africana, las naciones de África se diferencian favorablemente de las de otras regiones como Asia y Oriente Medio, que siguen careciendo de un mecanismo multilateral comparable para abordar los conflictos y promover los derechos humanos. Al mismo tiempo, la UA sigue sufriendo el amiguismo y la falta de principios que aquejaba a su predecesora, la Organización de la Unidad Africana. La UA hizo intervenciones modestas en Burundi, Togo, Zimbabue y la República Democrática del Congo en 2005.

---

<sup>3</sup> Finalmente en la Cumbre celebrada en enero de 2006 fue elegido presidente de la Unión Africana Denis Sassou Nguesso, presidente de Congo (N. de la Ed.).

Actuando inicialmente de forma efectiva en Togo, la UA, y especialmente el presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, condenaron el golpe de Estado de febrero y amenazaron con imponer sanciones cuando Faure Gnassingbe intentó ocupar la presidencia tras la muerte de su padre sin celebrar elecciones. Sin embargo, cuando se celebraron los comicios unos dos meses después, la UA no condenó los actos bien documentados de intimidación, violencia y fraude electoral masivo.

La UA, apoyada por una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, facilitó una mejora significativa de la situación en Burundi, donde la sanguinaria guerra civil ha perdido sustancialmente fuerza. Por otra parte, la UA sólo ha logrado enviar emisarios al presidente Mugabe de Zimbabue, sin ejercer una presión significativa sobre él, ni siquiera cuando, a partir de mayo, ordenó la destrucción por motivos políticos de miles de hogares en las barriadas marginales urbanas, generando una crisis humanitaria. En la República Democrática del Congo, la UA ha hablado de abordar la cuestión políticamente delicada de los combatientes extranjeros en el país, pero aún no ha actuado. En Costa de Marfil, la UA ha ignorado la importancia de cuestiones de justicia y rendición de cuentas que probablemente sean esenciales para una paz duradera. Mientras tanto, ciertos líderes poderosos, como el primer ministro Meles Zenawi de Etiopía, eludieron totalmente la presión de la UA, pese a que, poco dispuesto a aceptar las victorias de la oposición en las primeras elecciones reñidas celebradas en el país en mayo, hizo que la policía matara a decenas de manifestantes y detuviera a miles de simpatizantes de la oposición.

---

Con la Unión Africana, África se diferencia favorablemente de Asia y Oriente Medio, que carecen de un mecanismo multilateral comparable para abordar los conflictos y promover los derechos humanos

---

## Justicia internacional

El sistema emergente de justicia internacional dio importantes zancadas en 2005, ayudando a cubrir algunos de los vacíos dejados por el decreciente apoyo gubernamental a los derechos humanos. El hecho más destacado fue que la Corte Penal Internacional (CPI) hizo públicos en octubre sus primeros autos de procesamiento. Los objetivos eran Joseph Kony y otros cuatro líderes del Ejército de Resistencia del Señor (ERS), el conocido grupo rebelde ugandés que ha creado toda una fuerza militar secuestrando niños y obligándolos a cometer todo tipo de atrocidades. Los procesamientos se toparon con las objeciones predecibles de quienes alegaron que perturbarían el proceso de paz ugandés, pero la mayoría de los observadores estimaban que el proceso de paz estaba moribundo, y que era más un

instrumento para que el ERS ganase tiempo y se reagrupara que un esfuerzo consciente para alcanzar un acuerdo con el Gobierno ugandés. De hecho, al deslegitimar aún más a la dirección del ERS, cabría decir que los procesamientos acelerarán el final de la guerra al hacer políticamente más difícil para el Gobierno sudanés seguir dando refugio al ERS en el sur de Sudán, especialmente si Jartum cede el poder ahí al Ejército de Liberación Popular de Sudán como parte del propio proceso de paz sudanés.

La Corte Penal Internacional recibió un importante impulso en marzo, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU le dio competencia para juzgar las atrocidades cometidas en Darfur. El principal obstáculo para la acción del Consejo de Seguridad fue EEUU, dada la hostilidad ideológica de la Administración Bush hacia el tribunal debido a su poder teórico para enjuiciar a ciudadanos estadounidenses por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio de un gobierno que haya ratificado el tratado de la CPI. Alemania inició el proceso de superar esa resistencia liderando el esfuerzo ante el Consejo de Seguridad, en septiembre de 2004, para establecer una comisión de investigación de la ONU sobre la limpieza étnica en Darfur. La comisión recomendó en enero de 2005 que el Consejo de Seguridad remitiera la situación de Darfur a la CPI.

La Administración Bush luchó para sugerir alternativas a la CPI, desde añadir una sala al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, sobrecargado de trabajo, hasta la improbable perspectiva de crear desde cero un nuevo Tribunal Penal Africano. Washington consideraba estas alternativas preferibles porque, aun cuando fueran menos eficaces, tenían menos probabilidades de tener jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. El firme respaldo dado a la CPI por muchos de los miembros africanos, así como el de la UE, y especialmente de Francia, contribuyó a ir más allá de estas opciones inferiores. Gran Bretaña también desempeñó un papel útil en las negociaciones. Ante la situación de tener que elegir entre conceder una inmunidad efectiva a los asesinos de Jartum y aceptar la jurisdicción de la CPI sobre Darfur, EEUU se abstuvo, junto con China, de votar en la resolución sobre la CPI en el Consejo de Seguridad, lo que permitió su adopción. Rusia votó a favor. Esa votación hizo que la CPI se convirtiera a partir de ese momento en una opción realista para enjuiciar incluso a tiranos cuyos gobiernos no hayan ratificado el tratado de la CPI.

Pero la Administración Bush siguió adoptando medidas extraordinarias para evitar cualquier posibilidad de que la Corte ejerciera su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses. Washington continuó chantajeando a los gobiernos para que aceptaran acuerdos bilaterales de inmunidad en los que se comprometen a no enviar nunca a un estadounidense a la CPI. E insistió en que los Estados que no eran partes de la CPI tienen la jurisdicción exclusiva sobre sus nacionales en Darfur.

La CPI nunca fue el tribunal adecuado para juzgar a Sadam Husein y sus secuaces en el depuesto Gobierno iraquí porque cometieron la mayor parte de sus crímenes antes del 1

de julio de 2002, cuando entró en vigor la jurisdicción de la CPI. Pero el temor a que nuevos tribunales internacionales pudieran legitimar la justicia multilateral fue parte de la razón por la que la Administración Bush insistió en que los antiguos dirigentes de Irak fueran juzgados por un tribunal encabezado por iraquíes. EEUU mantuvo tozudamente esa decisión en 2005, aunque el Tribunal Especial iraquí estaba aquejado de múltiples problemas, incluidos su susceptibilidad a la injerencia política del nuevo gobierno iraquí, la falta de experiencia de sus miembros en juicios complejos, las inquietantes deficiencias en sus procedimientos adoptados y su dificultad para proteger a quienes intervinieran en sus actuaciones. Un tribunal dirigido internacionalmente, como el tribunal mixto internacional-nacional utilizado en Sierra Leona, podría haber superado la mayor parte de estas dificultades, si no todas.

Mientras tanto, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia hizo enormes avances en la detención de sospechosos procesados. La presión de EEUU y de la Unión Europea sobre Serbia desembocó en la entrega, entre octubre de 2004 y abril de 2005, de catorce personas que habían sido procesadas pero que seguían en libertad. Con la detención de estos procesados, habían comparecido ante el tribunal 131 sospechosos, y sólo nueve seguían libres, aunque entre ellos había figuras tan destacadas como el jefe del Estado Mayor del ejército serbobosnio Ratko Mladic, el presidente serbobosnio durante la guerra, Radovan Karadzic, y el general croata Ante Gotovina.

El Tribunal de Ruanda también mejoró de forma significativa el ritmo de sus enjuiciamientos en 2005, aunque siguió centrándose exclusivamente en el genocidio y, de forma inquietante, aún no había dictado autos de procesamiento por las atrocidades cometidas por el Frente Patriótico Ruandés (FPR). España intervino en este vacío con la apertura de una investigación sobre una decena de cargos del FPR. De forma similar, Bélgica procesó a Hissene Habre, dictador del Chad en la década de 1980, cuyos asesinatos masivos y torturas no están cubiertos por la jurisdicción de ningún tribunal internacional existente. Tras haber prometido en varias ocasiones que extraditaría a Habre si éste era procesado en Bélgica, el presidente de Senegal Abdoulaye Wade sufrió una quiebra de voluntad en noviembre y remitió el asunto a la Unión Africana para que lo resolviera.

En cuanto al Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL), su procesado más importante, el ex presidente de Liberia Charles Taylor, siguió disfrutando de un cómodo exilio en Nigeria. En junio de 2004, el Tribunal había revelado el procesamiento de Taylor por su apoyo a los brutales rebeldes del Frente Unido Revolucionario, conocidos por el asesinato, la violación y la mutilación de extremidades de sus numerosas víctimas durante la guerra civil de Sierra Leona.

El presidente nigeriano Obasanjo hizo un servicio al conceder refugio a Taylor en agosto de 2003 para allanarle la salida de Liberia sin que hubiera más derramamientos de san-

gre. Pero como reafirmó el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre del 2005, ese refugio iba a ser sólo temporal. En el curso de 2005 también pidieron a Obasanjo que entregase a Taylor para ser juzgado el Parlamento Europeo en febrero; el Congreso de EEUU en mayo; el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en julio, y la Unión de Río Mano, integrada por Guinea, Liberia y Sierra Leona, también en julio.

No obstante, más de dos años después de la huida de Taylor de Liberia, el presidente Obasanjo se negó porfiadamente a entregarlo al TESL. Obasanjo alegó que acataría la solitud de un Gobierno liberiano elegido democráticamente de que entregara a Taylor para ser juzgado, pero ese planteamiento pasaba la pelota a un nuevo gobierno que podría temer legítimamente las represalias de los numerosos aliados violentos de Taylor en Liberia. También es de esperar que el presidente liberiano Ellen Johnson-Sirleaf, recién elegido en noviembre, haga esta petición, pero si Obasanjo fuera un verdadero hombre de Estado, se ocuparía él mismo del asunto en lugar de esconderse tras el nuevo presidente de Liberia. La Unión Africana, por su parte, debería fomentar esta iniciativa, pero en lugar de buscar una victoria para la justicia y el Estado de derecho –metas aparentes de la organización–, en 2005 algunos líderes de la Unión parecían más preocupados por sentar un precedente que algún día podría facilitar su propio enjuiciamiento.

La justicia avanzó muy poco en Timor Oriental. Debido a la ausencia de apoyo político y económico, el tribunal de la ONU en este país fue clausurado en mayo, seis años después de su creación. El tribunal logró enjuiciar y condenar a un número significativo de miembros de milicias de Timor Oriental, pero la mayoría de los indonesios procesados, incluido el general Wiranto, ex ministro de Defensa y comandante de las fuerzas armadas indonesias, seguía en libertad en Indonesia, sin ser procesado ni juzgado. Mientras, tanto el Consejo de Seguridad de la ONU como el secretario general de la organización, Kofi Annan, cediendo ante Indonesia como potencia regional e importante aliado contra el terrorismo, siguieron reteniendo un informe encargado por el secretario general que había recomendado mantener con vida el tribunal. El informe también recomendaba la creación de un tribunal penal internacional si Indonesia seguía sin colaborar en el frente de la justicia, pero el Consejo de Seguridad devolvió el informe al secretario general sin emprender acciones.

## **Naciones Unidas**

Cualquier análisis del papel de Naciones Unidas en materia de derechos humanos debe dividir la institución en dos partes esenciales. Por una parte está la Secretaría y sus agencias operativas, y por otra, una serie de salas de conferencias donde se reúnen las naciones del mundo para abordar una amplia gama de cuestiones. Kofi Annan es sin duda el más comprometido con la promoción de los derechos humanos de todos los secretarios genera-

les que ha conocido la organización. Por ejemplo, por medio de sus intervenciones personales sobre Darfur (incluidas al menos dieciséis declaraciones sobre la situación en el 2005), Annan luchó por mantener la atención hacia la crisis en curso y dar lugar a nuevas acciones correctivas. Su labor en materia de derechos humanos contó con la ayuda de Louise Arbour, una alta comisionada para los derechos humanos enérgica y de principios, cuya labor de establecer una misión de observación en Nepal y para informar sobre la violencia en Uzbekistán fue especialmente útil.

También en 2005, un nuevo informe sobre seguridad humana publicado por la Universidad de la Columbia Británica ofreció argumentos convincentes de que los esfuerzos internacionales para abordar los conflictos están salvando vidas. Como es lógico, las omisiones de actuación en crisis de derechos humanos siguieron ocupando los titulares de la prensa, pero en muchos lugares, como Liberia, donde los combates habían disminuido y se celebraron unas elecciones con éxito, la intervención internacional contribuyó a poner fin a las muertes y a lanzar gobiernos democráticos respetuosos de la ley. La rápida expansión de la diplomacia preventiva y de las misiones para el mantenimiento de la paz de la ONU sugiere que una respuesta multilateral a las crisis a veces puede superar el vacío de liderazgo de algunos de los miembros más poderosos de la ONU. Sin embargo, es probable que siga siendo esencial el liderazgo de una potencia importante para que sea significativo el apoyo de la cumbre de la ONU a la “responsabilidad de proteger” a los civiles en peligro grave.

En cuanto a las Naciones Unidas como foro gubernamental, los resultados fueron, en el mejor de los casos, desiguales. En el lado positivo, finalmente se aceptó que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se había convertido en una bochornosa vergüenza que desacredita a toda la organización. Con un gran número de sus cincuenta y tres escaños ocupados por gobiernos que cometen brutales abusos, la Comisión funcionaba menos para promover los derechos humanos que para garantizar la parálisis, protegiendo de las críticas a casi cualquier gobierno (salvo Israel), con independencia de sus abusos.

Lamentablemente, este creciente consenso desembocó en poco más que en una declaración de que la Comisión debe ser sustituida por un Consejo de Derechos Humanos más eficaz. A finales de noviembre aún no había ningún acuerdo sobre cómo debía constituirse dicho Consejo.<sup>4</sup> Lo que es más importante, seguía habiendo muchas disputas sobre cómo mejorar la calidad de los miembros del Consejo.

---

<sup>4</sup> Finalmente el 15 de marzo de 2006 el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue aprobado por la Asamblea General por una amplia mayoría y con el voto en contra de Estados Unidos. Un total de 170 países votaron a favor mientras que Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau lo hicieron en contra; Irán, Venezuela y Bielorrusia se abstuvieron (N. de la Ed.).

Gran parte del problema con los miembros de la Comisión radica en la práctica de permitir que cada región imponga qué gobiernos ocuparán los escaños que se les asignan sin ninguna aportación del resto del mundo. Cada región suele proponer una “lista limpia” –el mismo número de candidatos que escaños disponibles–, lo que hace discutible la ulterior elección de la ONU. Debido a que la composición de estas listas queda por tanto en manos de negociaciones en la trastienda, muchas veces las cualificaciones en materia de derechos humanos de los candidatos han tenido poco que ver en el proceso de nominación. De hecho, dado que los gobiernos que cometen abusos solían dar más importancia a evitar la condena de la Comisión que los gobiernos que respetan los derechos, se tomaban el tira y afloja más en serio y por tanto, tendían a imponerse.

---

### Gran parte del problema con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos radica en permitir que cada región imponga qué gobiernos ocuparán los escaños

---

Hay varias posibles soluciones para poner fin a esta carrera a peor. La más obvia sería insistir en que cada región proponga más candidatos que plazas que tiene asignadas –quizá el doble–, asegurando así una opción real cuando se celebren elecciones. Exigir una votación candidato por candidato –en lugar de toda una lista– permitiría que el resto de las naciones del mundo tuviera al menos la posibilidad de eliminar con sus votos a los candidatos inadecuados. Exigir a los candidatos que se presenten a la elección al Consejo que obtengan una mayoría de dos tercios de los Estados miembros de la ONU haría mucho menos probable que pudieran ser elegidos los autores de los peores abusos. Reservar un pequeño número de escaños “en general”, disponibles por orden de llegada para cualquier región que haya logrado ocupar todos los escaños que se le han asignado, sería un incentivo para mejorar aún más la calidad de los candidatos.<sup>5</sup>

La dificultad para resolver estas cuestiones y avanzar en la creación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos dejó la embarazosa perspectiva de que la Comisión, una institución que ya está totalmente desacreditada, pudiera reunirse de nuevo en marzo y

---

<sup>5</sup> En marzo de 2006 la Asamblea General de la ONU designó a Cuba como uno de los miembros que formarán parte del Consejo, en el que también estarán otros países de dudosa reputación respecto al respeto de los derechos humanos como China, Pakistán, Arabia Saudí y Rusia. El voto de los 191 miembros de la ONU fue secreto y todos los elegidos contaron con el apoyo de más de 96 países, el mínimo necesario, para ocupar uno de los 47 puestos en el Consejo, que están divididos por zonas geográficas: 13 corresponden a África, 13 a Asia, ocho a América Latina, siete a los países occidentales y seis a Europa del Este. Junto a Cuba, el bloque latinoamericano estará integrado por Brasil, Argentina, México, Perú, Guatemala, Uruguay y Ecuador. Venezuela, que aspiraba a un puesto, no logró suficientes votos (N. de la Ed.).



abril, no sólo para supervisar una transferencia de responsabilidades y su disolución, sino para realizar sus actividades habituales. Este fracaso colectivo de voluntad política sólo daría nueva munición a los críticos de Naciones Unidas.

La importante cumbre de líderes mundiales convocada por Naciones Unidas en septiembre para conmemorar el 60 aniversario de la organización fue, en muchos aspectos, una decepción. Su aportación más importante fue dar un imprimatur oficial al concepto patrocinado por Canadá de una “responsabilidad de proteger” a las personas en peligro de sufrir la pérdida de la vida en gran escala, aunque sigue quedando mucho por hacer para convertir en realidad ese compromiso, como la creación de una fuerza de reacción rápida en estado de alerta. En un apoyo tácito a la visión de Kofi Annan de que los derechos humanos han de unirse a la seguridad y al desarrollo como uno de los tres pilares del sistema de la ONU, la cumbre también se comprometió a aumentar en gran medida el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los intentos para condenar el terrorismo en todas sus formas encallaron en los sempiternos intentos de algunos de justificar los ataques deliberados contra civiles en casos de liberación nacional o luchas contra la ocupación, y en los esfuerzos de muchos gobiernos occidentales para excluir el concepto de terrorismo patrocinado por el Estado.

John Bolton, el nuevo embajador estadounidense ante Naciones Unidas, desempeñó un papel especialmente poco afortunado durante las negociaciones de la cumbre. Cuando concluían dichas negociaciones, el recién llegado embajador introdujo cientos de enmiendas de última hora, muchas de ellas concebidas para eximir a EEUU de cualquier obligación vinculante. El extremismo de sus intervenciones abrió las puertas para que otros gobiernos permitieran dar rienda suelta a sus peores tendencias, y aparentemente se deshicieron algunos compromisos ya acordados, incluidos algunos relativos a numerosos aspectos del Consejo de Derechos Humanos. Gran parte de la culpa la tuvieron también diversos gobiernos obstructionistas, como los de Cuba, Argelia, Zimbabue, Bielorrusia, Pakistán, Rusia y Venezuela, que se aprovecharon de la confusión para debilitar cualquier iniciativa que pudiera mejorar el cumplimiento de las normas de derechos humanos.

La cumbre tampoco alcanzó ningún acuerdo sobre un plan para ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, incluido el de añadir varios nuevos escaños permanentes que reflejaran los cambios de poder acaecidos desde los años cuarenta. La competencia por esos escaños permanentes resultó especialmente contraproducente para el respeto a los derechos humanos, puesto que algunos de los contendientes más destacados –Alemania, Japón, Nigeria y Sudáfrica– estaban deseando no hacer ni decir nada que pudiera ofender a sus posibles partidarios. La reticencia de Sudáfrica y Nigeria a hacer enemigos tuvo un efecto especialmente nocivo en las actividades en materia de derechos humanos de la Unión Africana.

## Reflexiones finales

Por alentadores que hayan sido algunos de los acontecimientos de 2005, no pudieron ocultar los numerosos compromisos que afectan a la defensa de los derechos humanos derivados de la lucha contra el terrorismo. No hay duda de que el terrorismo representa hoy una amenaza grave. Todos los gobiernos tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para hacer frente a este peligro mortal. Pero la gravedad de la amenaza no justifica el abierto desacato de las normas de derechos humanos al que la respuesta de ciertos gobiernos ha dado lugar. Muchos gobiernos han experimentado graves amenazas para la seguridad, desde la invasión hasta la guerra civil, que ponen en peligro las vidas de sus ciudadanos. La actual amenaza del terrorismo se diferencia únicamente en que los ciudadanos de las principales potencias occidentales ocupan un lugar destacado entre las víctimas. Tras predicar durante muchos años que todos los gobiernos deben responder a las amenazas para la seguridad dentro de los límites de las normas de derechos humanos, estos gobiernos occidentales no deberían sorprenderse de que las alarmas de la hipocresía suenen con fuerza cuando alegan preocupaciones de seguridad para defender sus propias transgresiones en materia de derechos humanos.

Debido a la enorme influencia de los gobiernos occidentales, y a su importancia como partes importantes en la defensa mundial de los derechos humanos, esta hipocresía oficial ha perjudicado de forma sustancial la causa de estos derechos. Reduce la capacidad de convicción de estos gobiernos cuando sí se alzan en nombre de los derechos humanos, pues debilita la fuerza efectiva de las normas internacionales que vulneran. Que estos compromisos en derechos humanos son innecesarios –que debilitan en lugar de promover la campaña contra el terrorismo– hace que la conducta de las principales potencias occidentales sea aún más trágica. Hace falta con urgencia un liderazgo inteligente, que los líderes gubernamentales que aún abrazan los derechos humanos se alcen, rechacen este enfoque erróneo para combatir el terrorismo y reafirmen que incluso en medio de una grave amenaza para la seguridad, el respeto a los derechos humanos es bueno para todos.

El papel que desempeña Washington en la degradación en curso del liderazgo en materia de derechos humanos es especialmente peligroso. Ahora que la responsabilidad por el uso de la tortura y de tratos inhumanos ya no se puede achacar con verosimilitud a percances de soldados de baja graduación del turno de noche, es el momento de que la Administración Bush reconozca lo erróneo de sus políticas de interrogatorio y asuma el respeto a los derechos humanos como un imperativo moral, legal y pragmático. Hará falta la presión de los ciudadanos de EEUU, y también de amigos y aliados de todo el mundo. Por el bien de la causa de los derechos humanos, y por la seguridad de quienes corren el peligro de sufrir ataques terroristas, es esencial la reevaluación y la revocación de las vergonzosas políticas de Washington.